

Bogotá, D.C. 02 de octubre de 2023

BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sección Tercera - Subsección A

rmemorialessec03sbtadmccun@cendoj.ramajudicial.gov.co

rmemorialessec03sctadmccun@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá, D.C.

Referencia:	Medio de control:	Reparación Directa
	Radicado:	25000233600020230027600
	Demandante:	Incubadora Santander S.A.
	Demandado:	Ministerio del Interior y Otros
	Asunto:	Contestación de la demanda

Su señoría

SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS, mayor de edad vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.620.303 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 186.605 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Ministerio del Interior, por medio del presente escrito comparezco ante usted con el fin de **CONTESTAR LA DEMANDA** citada en la referencia, en los siguientes términos:

1. PRETENSIONES

Manifiesto al Despacho que el Ministerio del Interior se opone a todas y cada una de pretensiones de los demandantes y desde ya solicito se absuelva al Ministerio del Interior de todas y cada una de las declaraciones y condenas pretendidas por el apoderado en el escrito de la demanda, pues las considero infundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico frente a mi representada. En consecuencia, solicito su Señoría, se sirva denegarlas, toda vez que frente al asunto objeto de demanda concurren en favor de la entidad que represento la excepción previa de falta de legitimación material en la causa por pasiva, por cuanto, mi representado no participó, directa ni indirectamente en los hechos que dan lugar a la presente demanda. Sumado a esto, de conformidad con las razones de la defensa que propondré, por encontrarse probadas las excepciones: i) inexistencia de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior, ii) inexistencia del perjuicio, iii) el hecho de un tercero y iv) innominada o genérica.

2. EXCEPCION PREVIA

FALTA DE LEGITIMIDAD MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA:

Sobre la legitimación material en la causa por pasiva es necesario recordar que el Consejo de Estado señaló lo siguiente:

“(…) Resulta requisito indispensable y necesario para que pueda entrarse la relación procesal que en la demanda se precise además de la parte demandante, la parte demandada y su representante, y en el auto admisorio se ordene su notificación y no es suficiente, a la luz de las normas citadas la precisión del acto o actos demandados y de las autoridades que las expidieron, pues es necesario identificar debidamente la parte demandada, la cual debe tener capacidad para ser sujeto procesal y ser su representante (…)” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1989.

El mismo Consejo de Estado, ha manifestado:

*“(…) La Nación es una sola y cuando su responsabilidad por la prestación de un servicio público o el ejercicio de una potestad, y éste es prestado por dos entes diferentes - sin distinción en aspectos temporales o espaciales -, **sólo podrá actuar como representante judicial de la Nación un sólo apoderado** puesto que de conformidad con el artículo 66 del C. P. C., modificado por el artículo 1º. Numeral 24 del decreto extraordinario 2282 de 1989, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del C.C.A., **se establece en forma omnicomprensiva y sin excepciones, que en “ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona” y que si se confiere poder a varios, el primero será el principal y los posteriores sustitutos en su orden. Porque de lo contrario se atenta contra el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política** (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No.10.367, sentencia del 6 de agosto de 1997 (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- **La función de salvaguardar el ORDEN PÚBLICO NO está a cargo del Ministerio del Interior.**

En materia de orden público, entendido como función de garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía, es a la Policía y al Ejército Nacional como entes del Ministerio de Defensa, a quien les corresponde su control, de tal manera que el artículo 217 y 218 de la Constitución Política establece que a tales organismos les está encomendado, respectivamente, (1) la defensa del orden constitucional y (2) el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz.

Sin duda, aunque la Nación es una sola, para efectos de atribución de responsabilidad concreta se debe verificar, sin excusa, a cuál de las entidades demandadas se le imputa el deber legal de protección, defensa y seguridad, es decir, el deber de garante del derecho conculcado. Y como ya se indicó las medidas de defensa y seguridad, además de la ejecución de las mismas, están a cargo del Ministerio de Defensa, y sus entes, entre ellos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Lo anterior, en consonancia con lo señalado en la Constitución Política Nacional y el Decreto 049 de 2003 que en su artículo primero incluye dentro de la estructura del Ministerio de Defensa a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, siendo así tales organismos parte integrante y esencial del ministerio, lo cual, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1512 de 2000 *“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”* tiene como una de las funciones esenciales:

“(…) Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. (…).”

Con base en lo expuesto en la demanda y de acuerdo con las competencias asignadas al Ministerio del Interior por la Constitución Política y la ley, está claro que dentro del presente proceso esta entidad cuenta con el **presupuesto excepcional falta de legitimación material en la causa por pasiva** y por ende al no existir tal legitimación, no se cumple la condición necesaria de dictar sentencia desfavorable a los intereses del Ministerio del Interior.

Con base en el artículo 18 literal c)¹, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 2893 de once (11) de agosto de dos mil once (2011) “por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”. El artículo segundo de dicho decreto describe las funciones del Ministerio del Interior en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. El Ministerio del Interior, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo [59](#) de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:

1. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública del Sector Administrativo del Interior.
2. Diseñar e implementar de conformidad con la ley las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, en coordinación con las demás entidades del Estado competentes, así como la prevención a las violaciones de estos y la observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial y social.
3. Servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promover la integración de la Nación con el territorio y el desarrollo territorial a través de la profundización de la descentralización, ordenamiento y autonomía territorial y la coordinación y armonización de las agendas de los diversos sectores administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este objetivo.
4. Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades competentes, la política pública para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de Gobierno en las administraciones locales ubicadas en zonas fronterizas.
5. Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos corresponda.
6. Atender los asuntos políticos y el ejercicio de los derechos en esta materia, así como promover la convivencia y la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la Nación.
7. Promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en las entidades territoriales.
8. Administrar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonseconteniendo en cuenta la participación del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, según los proyectos que se presenten y de conformidad con la política que en materia de seguridad y convivencia defina el Gobierno Nacional.
9. Administrar el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de Protección de Justicia y el Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.

¹ “**ARTÍCULO 18. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.** De conformidad con lo establecido en el artículo [150](#) numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para: (...)”

c) Modificar los objetivos y estructura orgánica de los Ministerios reorganizados por disposición de la presente ley, así como la integración de los sectores administrativos respectivos (...)”

10. Formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.

11. Formular y hacer seguimiento a la política de atención a la población LGBTI para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.

12. Formular y hacer seguimiento a la política de atención a la población en situación de vulnerabilidad, para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.

13. Coordinar, con el concurso de los demás ministerios, la agenda legislativa del Gobierno Nacional en el Congreso de la República y las demás entidades del orden nacional.

14. Servir de órgano de enlace, comunicación y coordinación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.

15. Coordinar con las demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y mecanismos eficientes en materia electoral que busquen garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.

16. Formular y promover las políticas públicas relacionadas con la protección, promoción y difusión del derecho de autor y los derechos conexos. Así mismo, recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales suscritas por el Estado colombiano en la materia.

17. Incentivar alianzas estratégicas con otros gobiernos u organismos de carácter internacional, que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Sector Administrativo del Interior, en coordinación con las entidades estatales competentes.

18. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la ley.”

De manera diáfana se logra demostrar que el Ministerio del Interior no tiene ninguna competencia atribuida por la Constitución Política o la ley que permita imputarle el daño sufrido por los demandantes ante los perjuicios ocasionados por los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**.

Se resalta el numeral segundo contenido en el Decreto Ley 2893 de 2011 para decir que, si bien esta es la norma que utiliza la apoderada de los actores para solicitar la vinculación del Ministerio del Interior, no se logra hacer el juicio de imputación necesario para, siquiera, concluir en la necesidad de que el Ministerio del Interior deba ser mantenido como sujeto procesal demandado dentro del expediente.

En este orden de ideas, las competencias atribuidas por la ley en materia de diseño e implementación de políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos y preservación del orden público, es como su nombre lo indica, de carácter político administrativo y no de carácter operativo. Para un mejor entendimiento del despacho, se explica que la competencia de diseño de políticas públicas para la prevención, respeto y garantía de los derechos humanos se realiza con el fin de que las entidades del Estado encargadas de proteger real y efectivamente los derechos humanos, puedan ejercer su labor de manera más organizada, eficiente y garantista.

Concordante con lo anterior, el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República.

- **LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA**

La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, las cuales ejercen el monopolio de la fuerza de manera legítima; es decir, actúan dentro de la legalidad.

Las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación.

Entre sus funciones prioritarias se encuentran las que demanda la Constitución del año 1991, tales como velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la independencia, así como velar por el mantenimiento del orden constitucional.

La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden público in-terno, es un cuerpo armado al igual que las Fuerzas Armadas, pero es de naturaleza civil.

Entre sus funciones principales está la del mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, el asegurar a los individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno; es decir, perseguir y capturar a los delincuentes.

Hay tres características especiales que tiene la fuerza pública para lograr un efectivo desarrollo de sus funciones:

1. La fuerza pública no es deliberante; es decir, no se puede sindicalizar, no se puede reunir fuera del orden de la autoridad legítima, sus miembros no pueden sufragar mientras estén activos en el servicio y en ningún caso pueden intervenir en actividades de partidos políticos.

2. La fuerza pública está obligada a la noción de obediencia debida; es decir, los miembros de grados inferiores deben siempre obedecer las órdenes de su superior inmediato (sólo en el caso de la fuerza pública, nunca en el de los civiles); sin embargo, las órdenes que vayan en contra de los derechos humanos pueden ser alegadas por el subalterno.

3. La fuerza pública goza del fuero militar; es decir, ésta no responde ante la justicia penal ordinaria, sino que lo hace ante los tribunales militares.

De las normas resaltadas anteriormente, así como de los hechos, base de esta demanda, no se encuentra que exista relación de causalidad, entre las funciones que legalmente desarrolla el Ministerio del Interior y la afectación económica que indica sufrir la Empresa demandante como consecuencia del denominado Paro Nacional del 2021.

Por ende el Ministerio del Interior, al no encontrarse dentro de sus funciones el control del orden público, además de que el señalado paro fue eminentemente de inconformidad general de la ciudadanía, el Ministerio del Interior no se encuentra legitimado en la causa material por pasiva para entrar a responder material ni sustancialmente de los perjuicios que el demandante manifiesta haber sufrido por no poder recibir los insumos que necesitaba para el desarrollo de su actividad, ni el poder enviar desde sus lugares de producción los huevos, pollos y demás elementos que mediante su actividad constituyen fuente y resultado de su labor.

Por todo lo anterior, solicito muy respetuosamente a su Señoría declarar la FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA en favor del Ministerio del Interior.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Su señoría invoco como fundamentos de derecho los siguientes:

- **Normativa**

Constitución Política, 2, 90, 217, 218

Ley 489 de 1998

Decreto 1512 de 2000 *“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”*.

Decreto Ley 2893 de 2011 *“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”*.

Decreto 4065 de 2011 *“Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura.”*

- **Jurisprudencia:**

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1989.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de octubre 11 de 1990.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No.10.367, sentencia del 6 de agosto de 1997.

Consejo de Estado, sentencia de abril 26 de 2001, Expediente 12537, C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010. Expediente No. 19287. C.P. Ruth Stella Correa Palacio

Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Julio de 2011 Expediente (19753), *M. P. Mauricio Fajardo Gómez*.

Consejo de Estado Sección Tercera Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Expediente 28711 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, sentencia de veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015), expediente No. 33692. Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón (E).

Consejo de Estado Sentencia de Unificación N° 85001-33-33-002-2014- 00144-01 (61.033) 29 de enero de 2020.

Consejo de Estado Sección Tercera en sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) con Radicación número: 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063) Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

4. RAZONES DE LA DEFENSA

Su señoría a pesar que considero que lo que se ha desarrollado hasta aquí debe prosperar, entro a defender la demanda, así:

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver es: conforme a sus competencias: **¿La demandada NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR debe responder por los presuntos perjuicios sufridos por la sociedad demandante en hechos ocurridos durante el paro nacional del 2021?**

4.2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

“IV. HECHOS RELEVANTES GENERALES”

HECHO 1: No es cierto, las organizaciones sociales señaladas por la demandante no fueron las únicas que confluyeron en las movilizaciones y protestas. La motivación en la movilización fue pluricausal no exclusivo de la reforma tributaria.

HECHO 2: No es cierto, no fue la única ni la primera movilización social. Respecto a las afectaciones del sector avícola **a mi representada no le consta** y nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 3: Narra supuestas actuaciones de la **Camara de Comercio de Cali**, **a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 4: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, **a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 5: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 6: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 7: Parcialmente cierto, narra supuestas actuaciones de la **Gobernadora del Valle del Cauca**, **a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior..

HECHO 8: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, **a mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 9: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 10: Narra supuestas actuaciones del representante de la sociedad **Incubadora Santader, Pronavicola S.A.**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones por cuanto no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 11: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 12: Es cierto, no obstante, narra actuaciones del Presidente de la República, que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 13: Narra supuestas actuaciones de **la Central de Abastecimiento de Valle, CAVASA**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 14: Parcialmente cierto respecto a las noticias presentadas en medios de comunicación. En cuanto a las cifras enunciadas, a **mi representada no le consta** y nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 15: Narra supuestas actuaciones de la **Camara de Comercio de Buenaventura**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 16: Es cierto, no obstante, narra actuaciones del **Senado de la República**, que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 17: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 18: Narra supuestas actuaciones de **FENALCO y el Registro Nacional de Despachos de Carga por carretera (RNDC)**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 19: Narra supuestas actuaciones de la representante de **FENALCO**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 20: Narra supuestas actuaciones de la res **FENALCO y Scotiabank Colpatria**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte

probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 21: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 22: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 23: Parcialmente cierto sobre los pronunciamientos del Presidente de la República. De igual manera, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 24: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 25: Narra supuestas actuaciones de la sociedad **Incubadora Santader**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 26: Narra supuestas actuaciones investigativas del diario **el Tiempo**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 27: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior..

HECHO 28: Parcialmente cierto sobre los pronunciamientos del **Ministro de Hacienda**. Respecto a las supuestas actuaciones de **FEDESARROLLO**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 29: Narra supuestas actuaciones de la **Camara de Comercio de Cali y Asobancaria**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 30: Narra supuestas actuaciones de la **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 31: Narra supuestas actuaciones del **Consejo Gremial Nacional**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 32: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 33: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 34: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 35: Narra supuestas actuaciones del representante de la sociedad **Huevos Kikes**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 36: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 37: Narra supuestas actuaciones de la **FENAVI** y de los representantes de las sociedades **Santa Anita Nápoles, Pronavícola y Nutriavícola**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 38: Narra supuestas actuaciones de los **Comités Intergremiales de Valle del Cauca y Nariño, como el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 39: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 40: Narra supuestas actuaciones de la **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 41: Narra supuestas actuaciones de la **FENAVI**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso,

siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 42: Narra supuestas actuaciones del **Ministerio de la defensa y el el Consejo Gremial Nacional**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 43: Narra supuestas actuaciones de la **Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 44: Narra supuestas actuaciones de la **Defensoria del Pueblo**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 45: Narra supuestas actuaciones de la **FENAVI**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 46: Narra supuestas actuaciones de las sociedades **Incubadora Santader, Le Coucou y FENAVI**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 47: Narra supuestas actuaciones de la **Autónoma Regional del Valle del Cauca**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 48: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 49: Narra supuestas actuaciones de **FENAVI**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 50: Es cierto, no obstante, narra actuaciones que no son propias del Ministerio del Interior.

HECHO 51: Narra supuestas situaciones de la **Incubadora Santader y Huevos Santa Anita – Nápoles que no son parte en este proceso**, a mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 52: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 53: Es cierto.

HECHO 54: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 55: Narra supuestas actuaciones de **FENALCO**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 56: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 57: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 58: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 59: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 60: Parcialmente cierto.

HECHO 61: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 62: Narra supuestas situaciones de **Huevos Santa Anita – Nápoles que no son parte en este proceso**, a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 63: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 64: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 65: No es un hecho, es una cita textual de una ley.

HECHO 66: No es un hecho, es una cita textual de un decreto.

“HECHOS RELEVANTES ESPECIFICOS FRENTE A INCUBADORA SANTANDER S.A.”

HECHO 67: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 68: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 69: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 70: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 71: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 72: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 73: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 74: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 75: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 76: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 77: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los

que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 78: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 79: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 80: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 81: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 82: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 83: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 84: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 85: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 86: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 83: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 87: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 88: Parcialmente cierto respecto al Ministerio del Interior, en lo que respecta a oras entidades a **mi representada no le consta** ninguna de las afirmaciones, por cuanto,

no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 89: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 90: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 91: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 92: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 93: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 94: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 95: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 96: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 97: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 98: A mi representada no le consta ninguna de las afirmaciones, por cuanto, no atribuyen actuaciones propias del Ministerio del Interior. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

HECHO 99: No es un hecho es un medio de prueba. Por lo cual, nos atendremos a los que resulte probado en el curso del proceso, siempre que tengan relación directa con las funciones y competencias del Ministerio del Interior.

4.3 EXCEPCIONES DE FONDO

4.3.1 *Inexistencia de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior*

Respecto la Responsabilidad del Estado por daños a la propiedad en manifestaciones, el honorable Consejo de Estado Sección Tercera en sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) con Radicación número: 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063) Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, señaló:

“El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CN).

*La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886 -que corresponde al citado artículo 2 CN- **concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un “asegurador general” contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática** derivada exclusivamente de la afectación de un derecho y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Se trata, pues, de una falla relativa del servicio9.*

*Imputar responsabilidad al Estado con base en disposiciones generales como la contenida en el artículo 2 CN **supondría la existencia de una obligación, en términos jurídicos, en la cual debe responder por todos los daños que sufran las personas**. Esa norma contiene un deber general, del cual, de forma abstracta o general, no pueden derivarse directamente obligaciones resarcitorias. Si no fuese así, el Estado respondería siempre que una persona le cause daño a otra, con independencia de su intervención en el hecho, lo cual constituye, evidentemente, una distorsión que aleja al juez de la Administración de los fundamentos civiles de la responsabilidad extracontractual del Estado, **para -en su lugar- ubicarlo en los predios ajenos de la responsabilidad política.***

*En esta materia se requieren análisis más precisos soportados en normas destinadas a regular la responsabilidad, que impongan verdaderas obligaciones resarcitorias en términos civiles, y no estén fundados en disposiciones que fueron concebidas para establecer fines relacionados con la organización del Estado. **Por tanto, las entidades públicas solo son responsables civilmente cuando con su acción u omisión causen un daño a otro (art. 2341 CC), pues solo en esos eventos puede surgir la obligación indemnizatoria.** (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Según la demanda, la Nación-Ministerio del Interior, incurrió en falla del servicio por omisión al deber de protección por los bloqueos de vías, disturbios, vandalismo el saqueo

y la destrucción de la propiedad privada de sede de la sociedad **INCUBADORA SANTANDER S.A.**

Es pertinente precisar que de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, los elementos para declarar la responsabilidad del Estado son dos: **i)** La existencia de un daño antijurídico, y **ii)** que ese daño antijurídico pueda ser imputado a una entidad o entidades del Estado. Dice la jurisprudencia:

“A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la atribución de la respectiva lesión; en consecuencia, ‘la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política’. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

Al respecto, esta Sección ha sostenido que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas” (Negritas y subrayado por fuera del texto original) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

Con base en lo expuesto, se tiene que una vez se tenga demostrado la existencia del daño antijurídico, esto es que el sujeto pasivo o las víctimas no estén en el deber jurídico de soportar, se debe proceder a hacer lo que se denomina la imputación del daño antijurídico.

Esta imputación del daño supone dos etapas; una primera denominada por la jurisprudencia como imputación fáctica, consistente en realizar un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación, y una segunda denominada imputación jurídica en la cual, a través de un estudio estrictamente jurídico, se determina si la entidad demandada debe resarcir los perjuicios por la verificación de una falla, la concreción de un riesgo excepcional o la ocurrencia de un daño especial.

La doctrina especializada, ha establecido que esta visión del Consejo de Estado de manera concreta supone en realidad, no dos, sino tres elementos para la estructuración de la responsabilidad extracontractual del Estado, así:

- 1) La existencia de un daño antijurídico
- 2) La imputación del daño a un agente estatal (lo que el Consejo de Estado denomina imputación fáctica)
- 3) El fundamento del deber de reparar (que correspondería a la imputación jurídica de que trata la jurisprudencia)

Todo lo anteriormente expuesto sirve para sustentar que tanto la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como la doctrina especializada en el tema, aseveran que, en todo juicio de responsabilidad extracontractual del estado, es necesario demostrar el porqué del daño antijurídico padecido por los convocantes es atribuible fácticamente a cualquiera de sus agentes.

Dentro de los hechos y fundamentos de derecho, el apoderado del convocante no logró cumplir con los elementos necesarios para atribuir responsabilidad al Ministerio del Interior por los **perjuicios derivados del paro nacional**.

Como se transcribió previamente, de acuerdo con el Consejo de Estado para que el juicio de imputación se haga de manera completa, es necesario que se haga un estudio de la situación fáctica en relación con las herramientas normativas (competencias y funciones legales) que permitan su atribución a determinado agente del estado. Sin embargo, el apoderado obvió esta obligación.

En la presente solicitud de conciliación, sin sustentar fáctica ni jurídicamente su dicho, el apoderado afirma que quienes deben reparar el daño sufrido por los convocantes son todas las entidades convocadas.

Por lo expuesto ampliamente, queda en evidencia la inexistencia de acción u omisión imputable al Ministerio del Interior que derive en la generación de los perjuicios que se persiguen dentro del presente proceso.

4.3.2 Inexistencia de un daño antijurídico

Conforme a los hechos descritos por el demandante y la innegable existencia del paro nacional lo cual es un hecho de público conocimiento, al parecer del suscrito apoderado, si pudo haber algún daño sobre la empresa demandante, el mismo no alcanza a ser del orden antijurídico, toda vez que el Gobierno Nacional y entre ellos el Ministerio del Interior, actuaron dentro de sus competencias en búsqueda de la solución definitiva al paro nacional presentado, el cual no fue provocado ni promovido ni des-conocido por el Gobierno Nacional. En el mismo sentido desde antes del inicio del paro se hizo todo lo jurídica y legalmente posible para evitarlo, eso sí respetando el derecho constitucional de la protesta, sin embargo, la dimensiones que éste tomó no estaban en las predicciones ni del más optimista de los contradictores hubiese predicho las consecuencias y duración del mismo, a pesar que el Gobierno Nacional en todo momento buscó a través del dialogo y la concertación llegar a un acuerdo con los organizadores del paro, sin tener éxito en el mismo de manera pronta.

Igualmente el Gobierno Nacional, al tiempo que buscaba como concertar la finalización del paro nacional a través del dialogo, siempre hizo presencia en todo el país, en la medida de sus posibilidades en cuanto el número de miembros de la fuerza pública, sin dejar abandonada la población en general, claro está que atender casos concretos, como lo solicitaba seguramente la empresa demandante, se hacía aún más difícil pero aun así, como en los mismos hechos de la demanda lo confiesa el demandante, la fuerza pública a través de la policía nacional y la armada nacional, los acompañó en algunas ocasiones en caravanas y en apoyo a su seguridad.

Así pues, no hay un daño antijurídico predicable respecto del Ministerio del Interior.

4.3.3 Hecho de un tercero

Retomando lo expuesto en las pretensiones, se tiene que la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por los daños causados por los perjuicios materiales sufridos por los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**.

En el asunto objeto de estudio y del presente pedido, no se deben acoger las pretensiones de la solicitud de conciliación, toda vez que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos, causados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas.

Bajo este marco, es importante destacar que los hechos por los cuales se presentaron los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021**, son ajenos a esta entidad, teniendo en cuenta que, como lo señala la misma parte actora, los hechos fueron perpetrados por actores sociales particulares.

Como podemos observar, estamos en el presente caso frente a las actuaciones atribuibles a terceros diferentes al Estado. Así mismo, se evidencia que no ha existido una actuación antijurídica atribuible a la administración en la producción del daño.

Considerando lo anteriormente expuesto, se observa que existió lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado el hecho de un tercero, al respecto se ha pronunciado el Consejo de Estado:

“A la administración le es posible exonerarse de responsabilidad si se acredita que la causa del daño fue de manera exclusiva y determinante el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o la constitución de una fuerza mayor”²

Más precisamente sobre el hecho de un tercero se ha dicho lo siguiente:

“Se destaca en particular, para los efectos de esta providencia, que el hecho del tercero será causa extraña que exonere de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúna los siguientes requisitos:

(i) Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño existiría solidaridad entre éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le dará derecho a éste para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención.

² Consejo de Estado Sección Tercera Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Expediente 28711 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(ii) *Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado.*

(iii) *Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina —sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor³*

En el caso concreto se observa que:

- i) ***Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño:*** Según lo declarado en los hechos de la demanda, las presuntas actuaciones de los participantes de los bloqueos, fueron los hechos determinantes en la causación del perjuicio
- ii) ***Que el hecho de tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad:*** Acogiéndonos nuevamente a lo expuesto en los hechos de la demanda, se identifica que los actos de bloqueo de vías y disturbios en el paro nacional del 2021, fueron ejecutados por personas particulares y su Comité del Paro Nacional, ajenas a la institucionalidad.
- iii) ***Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad:*** Para el Ministerio del Interior era imposible prever la magnitud del paro y sus consecuencias, toda vez, que este inicio en el marco de una marcha pacífica. Así mismo fue irresistible para el Ministerio del Interior, toda vez que, no se encuentra en el marco funcional de esta entidad la protección de la honra y bienes privados de las personas, así como tampoco a las lesiones en su integridad personal, en otras palabras, mi mandante no tiene competencias respecto a medidas de defensa y seguridad, así como tampoco cuenta con personal de la fuerza pública. Su labor se limita como mediador entre la comunidad y el Gobierno Nacional.

- **Precedente del Consejo de Estado:**

El honorable Consejo de Estado⁴ declaro la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero de las entidades demandadas dentro de un proceso de reparación directa en el que una sociedad comercial exigía el reconocimiento y pago de perjuicios con ocasión de unos disturbios y actos vandálicos que alteraron el orden público, así :

“Con la perspectiva de la estrecha relación entre el derecho de reunión o movilización de personas en lugares públicos y el mantenimiento del orden público (art. 2 Decreto 1355 de 1970), el precepto disponía que la autoridad de policía no debía adelantar procedimiento alguno contra las personas que acataran sus órdenes, pero facultaba a la misma autoridad para disolver el

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010. Expediente No. 19287. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

⁴ Consejo de Estado Sección Radicación número: 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063)

evento si degeneraba en tumulto, desorden o agitación que afectara la tranquilidad o inseguridad. Asimismo, la autoridad debía detener a quienes infringieran las normas penales o de policía, para ponerlas a disposición del funcionario competente (arts. 104 y 107). En todo caso, la policía podía impedir manifestaciones o movilizaciones que no hubieran sido anunciadas o que no cumplieran los objetivos anunciados por los organizadores (art. 105). También, debía desmovilizar a los manifestantes, si advertía que estos portaban armas o elementos con los que pudieran causar daño a los bienes públicos o a la propiedad privada y a decomisar dichos elementos, a través del ejercicio legítimo de la coerción para el restablecimiento del orden público (arts. 29 y 106). La Constitución retoma este enfoque al disponer que se garantizan solo las reuniones y manifestaciones públicas que sean pacíficas y al deferir al legislador la limitación de su ejercicio (reserva de ley).

El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la administración y que su acción **sea imprevisible e irresistible**.

El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. **La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible**. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. **El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración**.

Conforme a las pruebas, el 31 de agosto de 1999 hubo un paro cívico de gran magnitud en la ciudad de Barranquilla en el que se presentaron bloqueos de vías, quema de objetos e incluso el uso de armas de fuego. Una turba de por lo menos mil manifestantes vandalizó y saqueó la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. y de otros locales comerciales. Durante los disturbios las autoridades intervinieron en la medida de sus posibilidades con tanquetas y rescataron en dos ocasiones al personal que estaba atrapado en la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. Sin embargo, las protestas fueron de tal magnitud que el Ejército, última instancia en estas situaciones, tuvo que intervenir para restaurar el orden público en la ciudad.

La Policía Nacional sabía de las manifestaciones y estuvo presente en las zonas de la ciudad que iban a ser afectadas por el paro. Inicialmente, para garantizar el derecho de reunión o movilización y el mantenimiento del orden público. Cuando advirtió que algunos manifestantes portaban armas o elementos para causar daño a los bienes públicos y a la propiedad privada, intentó dispersar la movilización con tanquetas.

Las autoridades anticiparon aquellas situaciones que normalmente ocurren en las manifestaciones, no era posible prever que una manifestación -que debía ser pacífica y cuyo fin era reclamar por la deficiente prestación de los servicios públicos- terminaría con el saqueo y la quema de la sede de Arquiglass del Caribe Ltda., empresa que -además- no estaba relacionada con el motivo de la protesta. La magnitud de los actos vandálicos, la desproporción de la multitud de personas que participó en ellos, el uso de armas de fuego y otros elementos con alto poder de destrucción y la intención de dañar la propiedad privada del sector de forma indiscriminada, eran hechos imprevisibles para las autoridades, dentro del desarrollo normal y habitual de una manifestación.

La conducta de la turba de manifestantes tampoco podía ser resistida por las autoridades, pues la cantidad de personas que participaron en estos actos y las acciones violentas que emprendieron no eran propias de una manifestación pacífica, sino de una asonada que se salió de control. Los medios que tenía la Policía Nacional a su disposición impedían concentrar la totalidad de la acción defensiva en un solo establecimiento de comercio, circunstancia que limitaba la capacidad de acción para repeler este ataque. La Policía Nacional hizo presencia en la bodega en reiteradas ocasiones e intentó dispersar la multitud con tanquetas. Sin embargo, el ataque fue tan desproporcionado que, para controlar a los manifestantes, el Ejército Nacional tuvo que hacer presencia en la zona.

No debe perderse de vista que en estos eventos debe juzgarse la posibilidad de resistir las acciones violentas, de acuerdo con la capacidad operativa y los medios de los que dispone el Estado. **En materia de mantenimiento del orden público, esa capacidad debe ser valorada según la magnitud de las alteraciones que se presentan en determinado momento y los medios disponibles para su restablecimiento, para establecer si el Estado podía hacerle frente.**

Como el ataque a la sede de Arquiglass del Caribe Ltda. no podía ser previsto por la Policía Nacional **y tampoco podía ser resistido, se configuró el hecho de un tercero**". (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, la solicitud carece de fundamento jurídico si se tiene en cuenta que el hecho dañoso es atribuible única y **exclusivamente a terceros, en** este caso al tercero generador de los bloqueos de vías, cuya demostración corresponde a la parte convocante.

Al encontrarse demostrado que los **disturbios y los bloqueos de vías en el desarrollo del paro nacional del año 2021** se originó en el actuar de un tercero, en esta ocasión señala lo participantes de las protestas, descarta la acción como elemento de imputación frente al Ministerio del Interior; máxime si se tiene entonces que fueron personas totalmente ajenas al actuar del Estado y su administración las que causaron o propiciaron dichas conductas contravencionales.

4.3.4 Innominada o genérica

Solicito a su Señoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso- CGP, en concordancia con el artículo 306 del C de P.C, y 187 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, se sirva reconocer las excepciones que se llegaren a encontrar probadas aunque no hubieren sido alegadas expresamente.

En razón de lo anterior, solicitamos se tengan en cuenta los anteriores planteamientos para declarar probadas las excepciones propuestas y/o en su defecto, se denieguen las pretensiones de la demanda.

5. PRUEBAS

Solicito se tenga como pruebas las documentales ya aportadas por la parte demandante, dentro del escrito de demanda.

Respecto al dictamen pericial aportado por la parte actora conforme al artículo 219 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021, el Ministerio del Interior solicita que el perito asista personalmente a su despacho para los efectos de la contradicción del dictamen.

6. ANEXOS

Poder conferido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior para actuar dentro del presente proceso.

7. PETICIÓN

Solicito muy respetuosamente a su Señoría que no se acceda a las pretensiones de la demanda y de conformidad con lo anteriormente expuesto y en consecuencia se proceda a desvincular a la entidad que representó, en razón a la acreditación de excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva en favor del Ministerio del Interior.

De no considerar viable la solicitud anterior, adelantado el procedimiento correspondiente, respetuosamente se solicita declarar probadas en favor del Ministerio del Interior todas las excepciones señaladas en el acápite 4 del presente escrito, como son:

- 4.3.1 *Inexistencia de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior*
- 4.3.2 *Inexistencia de un daño antijurídico*
- 4.3.3 *Hecho de un tercero*
- 4.3.4 *Innominada o genérica*

8. NOTIFICACIONES

El Ministerio del Interior puede ser notificado en los correos electrónicos notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co o samuel.alvarez@mininterior.gov.co en su defecto en la Calle 12B No. 8 - 42 Teléfono (601) 242 7400, Ext. 3010.

Su señoría, con el respeto acostumbrado,



SAMUEL ALVAREZ BALLESTEROS

C.C. 79.620.303 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 186.605 del C. S. J.
E-mail: samuel.alvarez@mininterior.gov.co
Celular: 318 394 00 91